

Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, ANTE LA SOCIEDAD
PAASIKIVI DE FINLANDIA

HELSINKI, 27 de Mayo de 1993.

Señoras y señores:

Es para mí un alto honor encontrarme con ustedes en esta Sociedad, cuyo nombre recuerda al gran artífice de la exitosa política internacional de Finlandia. Creo que es un escenario adecuado para compartir algunas reflexiones sobre la democratización en América Latina y la experiencia chilena.

Desde los albores de la Independencia de América Latina, a comienzos del siglo XIX, la democracia, como sistema político primero y la democratización social después, han sido una aspiración permanente y determinante de su historia. Sin embargo, los resultados han sido desiguales.

En algunos países ella efectivamente ha arraigado, con algunas interrupciones; en otras ha sido difícil de establecer. Ello ha dado pie a visiones muy simplistas del continente y de sus problemas, llegando a crear la imagen de que la democracia es un sueño imposible en América Latina.

Quisiera revisar esa imagen, particularmente a raíz de la experiencia de la última década y de las nuevas posibilidades que abre el contexto internacional en que vivimos.

La democracia como sistema de gobierno tiene sus orígenes en Europa, pero tanto en este continente como en América Latina, tributaria de su cultura, el proceso para consolidarla no fue fácil. Los pueblos europeos debieron vivir períodos de extrema convulsión antes de que el sistema político, que tuvo su origen en Grecia cinco siglos antes de nuestra era y que fuera reinventado en el mismo continente más de dos mil años después, consiguiera implantarse en forma generalizada.

A lo largo de todo el siglo XIX, la formación de los estados nacionales y el establecimiento de la soberanía popular, fue un proceso lento y difícil, no exento de conflictos internos y también externos. Más tarde, en la primera mitad de este siglo, la democracia sufrió también fuertes convulsiones y su triunfo fue fruto de una dolorosa guerra que involucró al mundo entero.

El proceso en América Latina ha tenido semejanzas como también profundas diferencias con Europa. Las semejanzas derivan de que América Latina ha formado parte del universo cultural europeo desde hace quinientos años. Ni el cristianismo, ni la ilustración, ni el pensamiento democrático nos han sido ajenos, sino que han configurado nuestra tradición, forjada en el encuentro con Europa, con el universo indígena precolombino y por los continuos flujos migratorios europeos.

No en vano nuestras luchas por la Independencia están directamente vinculadas a las transformaciones que la Revolución Francesa produjo en el concierto europeo, y nuestro nacimiento como estados nacionales y representativos es paralelo a ese mismo proceso en Europa.

Quiero decir con esto que el pensamiento republicano y democrático es parte de nuestra tradición, de nuestra historia, y que América Latina es también forjadora de la concreción histórica de esos ideales que finalmente han pasado a ser universales.

Sin embargo, hubo una diferencia fundamental con el caso europeo que marcó la historia futura de América Latina. En Europa, la lenta construcción de la democracia representativa fue acompañada de un proceso de transformación económica de gran envergadura.

Mientras en la mayoría de los países, aunque con periodificaciones distintas, como es el caso precisamente de los países nórdicos, se pasó de la fase agraria a la fase industrial en forma exitosa, y la democracia política fue acompañada de un evidente mejoramiento de la calidad de vida de las grandes mayorías, en América Latina el desarrollo económico fue precario, lo cual condujo a problemas sociales graves, que incidieron en la estabilidad del régimen político.

Hacia la década del 60, de este siglo, América Latina había experimentado un crecimiento no despreciable, pero que estaba lejos de ser capaz de responder a la acumulación de demandas sociales. En este contexto, de suyo explosivo, se produjo, como en otras partes del mundo, un proceso de profunda ideologización.

Los años 60, tan ricos en imaginación y en utopías, tuvieron sin embargo una cara más oscura que el idealismo de los movimientos juveniles. Reinaron en esa época entre nosotros, a lo ancho de todo el abanico político, proyectos excluyentes y fundacionales,

que de formas más o menos autoritarias pasaban por la exclusión o el sometimiento del otro. Queríamos cambiarlo todo; queríamos refundar, con cada cambio de gobierno, las bases fundamentales de la nación, las normas de convivencia interna, el modelo de crecimiento.

Estos proyectos globales no admitían disenso, ni complementación, ni posibilidades de confluir en una alternativa distinta que superara las oposiciones. El drama del subdesarrollo nos impulsaba a buscar los caminos más rápidos y radicales para superar las consecuencias de la pobreza de nuestros pueblos.

Los problemas estructurales de las economías latinoamericanas —creciente deuda externa, un esquema de sustitución de importaciones que se revelaba como insuficiente para un crecimiento sostenido, un tamaño excesivo del Estado y de la burocracia, entre otros—, se sumaron a la crisis política y a la intolerancia ideológica para desencadenar el clima confrontacional que puso en grave peligro la estabilidad democrática.

Por otra parte, la dinámica de la guerra fría, el auge de los movimientos guerrilleros y la difusión masiva, a nivel de las fuerzas armadas de la región, de la doctrina de la seguridad nacional, crearon el caldo de cultivo para llevar a los militares del continente al convencimiento de que era necesario el recurso a la fuerza para solucionar la crisis y para evitar la caída de los países de la región bajo el imperio del marxismo.

A la amenaza del modelo cubano se agregó la inédita experiencia chilena, en la cual un Presidente socialista, Salvador Allende, llegó al poder democráticamente elegido. La consecuencia fue la imposición, en la mayoría de los países de la región, de gobiernos militares que apelaron a la fuerza para imponer un precario orden, basado en el sometimiento de la sociedad y la negación de las garantías individuales mínimas. Muchos perdieron la vida, muchos otros conocieron el exilio y la sociedad se sintió inerte frente a la fuerza de los militares como al fracaso de los proyectos en los cuales había creído.

La reconstrucción del dinamismo social y de las organizaciones de la sociedad civil en esas condiciones fue lenta y muy difícil pero, al mismo tiempo, fue sólida y madura. A lo largo de la década de los 80, gradualmente la democracia retornó a los países de la región.

Los fenómenos internacionales claves del comienzo de la década del 90 —como el fin de la guerra fría, el agotamiento de la ideologización de la política y la formación de un creciente consenso internacional sobre estrategias de desarrollo—, coinciden en América Latina con un proceso que pone al conjunto de la región en la perspectiva de consolidar regímenes democráticos y profundizar una reforma económica ya en marcha.

A diferencia de los años 80, la llamada "década perdida", marcada por la presencia predominante de regímenes autoritarios y un bajo desempeño económico general en la región, los años 90 se perfilan como la década de la revitalización del pulso político y económico de los países latinoamericanos.

En el caso de Chile, la recuperación de nuestra democracia ha traído consigo la normalización de las relaciones institucionales en el seno del Estado y el restablecimiento de la jerarquía democrática que confiere la primacía al poder civil. Y, sobre todo, ha significado la restauración de un clima de paz social y de reconciliación entre los chilenos.

A tres años de haber asumido el gobierno democrático que tengo el honor de presidir, puedo declarar con satisfacción que la ciudadanía, principal rector de la democracia, está plenamente vigente y se expresa en la soberanía popular, en la vigencia del Estado de derecho, en el respeto a las garantías individuales, en la fiscalización de los poderes públicos.

La transición chilena ha tenido características peculiares que a veces cuesta entender desde afuera.

Chile ha tenido una larga tradición democrática, con muy pocas y muy breves crisis institucionales. Esta tradición ha formado parte de nuestra identidad, por lo cual la crisis del 73 estuvo lejos de ser sólo una asonada de los cuarteles. Era una crisis profunda de cómo nos concebíamos como nación. Las secuelas de sufrimiento, fruto del odio y de la división, llevaron a una profunda revisión, en todos los sectores políticos, sobre cuáles habían sido los errores que nos habían conducido a un descalabro tan profundo y tan extraño.

De allí que la oposición de los sectores democráticos, luego de su lenta reconstrucción, decidieron unirse para enfrentar al régimen autoritario por la única vía que garantizaba no seguir perpetuando las divisiones, y esa vía fue derrotarlo en su propia institucionalidad. Ganamos un plebiscito venciendo al miedo y luchando por elecciones limpias y correctas. Fue un triunfo glorioso que reencontró al pueblo con su propia dignidad.

Convinimos entonces una transición pactada, y la Concertación de Partidos por la Democracia triunfó en las elecciones de Presidente de la República y de Parlamento. Pero tuvimos, sin embargo, que aceptar algunos rasgos de la institucionalidad establecida por el régimen autoritario y avanzar lentamente en una profundización del sistema democrático. En síntesis, aprendimos que la búsqueda de acuerdos era el camino para avanzar hacia los cambios garantizando la estabilidad. Sólo así podríamos forjar un auténtico proyecto nacional en beneficio de las grandes mayorías. Por eso valoramos profundamente la negociación, pese a las restricciones que ello impone.

En ese marco, uno de los desafíos más difíciles que debíamos enfrentar era la búsqueda de la justicia y la reparación a las violaciones a los derechos humanos. El gobierno que presido estableció la verdad de lo ocurrido, la mostró al país y buscó, en la medida de la posible, reparar la dignidad de las víctimas y de sus deudos. La conciencia nacional se conmovió y se ha generado una cultura de defensa de los derechos humanos para que nunca más, nunca más vuelva a suceder.

Debíamos asimismo normalizar las relaciones cívico-militares como imperativo de paz social, y hoy Chile cuenta con unas Fuerzas Armadas respetuosas de la institucionalidad, profesionales y sometidas al poder civil. Enfrentamos asimismo el compromiso de profundizar la democracia, y el año pasado se realizaron las primeras elecciones comunales después de veinte años, y hemos propuesto distintas reformas constitucionales, hoy en discusión en el Congreso, para el perfeccionamiento de la institucionalidad.

La estabilidad política lograda, los acuerdos entre los distintos sectores sociales y políticos, nos han permitido abocarnos con toda nuestra fuerza y creatividad a lograr el desarrollo económico y social que, como lo decía anteriormente, ha sido la gran amenaza para la estabilidad democrática en nuestro continente.

Hasta hace algún tiempo, América Latina se debatía entre políticas económicas populistas, que generaban aún mayor pobreza, y políticas económicas neo-liberales, que presuponían un marco autoritario por su enorme costo social. Ambas han fracasado y han sido abandonadas, puesto que la primera no contemplaba las enormes transformaciones en el aparato productivo que requiere la competitividad y la segunda no contemplaba la indisoluble unión entre inversión social y crecimiento, bajo el supuesto de que el mercado tarde o temprano se haría cargo de los pobres.

En los últimos años la mayoría de los países latinoamericanos han iniciado la modernización del Estado y la apertura de sus economías, lo cual ha llevado a un mayor disciplinamiento macro-económico y a elevar los índices de la productividad.

El caso chileno es particularmente interesante por los logros alcanzados. Durante el régimen militar se inició un proceso de reformas para liberalizar la economía, que si bien tuvo aciertos tuvo importantes deficiencias tanto políticas como sociales. Mi gobierno ha impulsado un modelo de desarrollo en el cual la democracia, el crecimiento económico y la justicia social están indisolublemente ligados y son requisitos mutuos para un proyecto exitoso.

Es evidente que existen distintas formas de manejar una economía de mercado: unas más justas que otras, unas más humanas que otras, unas más sensibles a sus propios efectos y, por lo

tanto, que buscan el modo de aplicarlos sin dogmatismos. Nosotros rechazamos la estrategia populista, que alienta expectativas más allá de las posibilidades de respuesta de nuestras capacidades económicas. También rechazamos la opción liberal, que no advierte que para que una economía funcione necesita estabilidad social y que ésta no se consigue cuando las grandes mayorías están marginadas de los beneficios del progreso.

La estrategia de crecimiento de nuestro país parte del reconocimiento de que somos un país pequeño, con mercados internos limitados. De allí que hayamos puesto nuestras esperanzas de desarrollo en la integración a la economía mundial. Las exportaciones han crecido a más de un 9 por ciento real como promedio en los últimos tres años, a pesar del ambiente internacional que ha sido desfavorable. Hemos cumplido cinco años de crecimiento sostenido que han elevado el ingreso por habitante desde 1.900 dólares anuales a 2.800, a fines del 92. Nuestra tasa de desempleo el año recién pasado fue de 4,5 por ciento, la más baja de nuestra historia, y la inflación osciló alrededor del 13 por ciento.

Una economía ordenada y en crecimiento no sustituye el esfuerzo solidario que se requiere para reducir la pobreza y la marginalidad. Nuestro gobierno ha aumentado en más del 20 por ciento el gasto social el año recién pasado y ello ha sido posible, en buena medida, por una reforma tributaria que fue concordada en el Parlamento con sectores de la oposición.

Estamos demostrando que una economía que crece, que es estable y que busca ser equitativa, requiere a su vez de un sistema político democrático. Eso es un proyecto nacional, y con mucho orgullo puedo decirles que cada uno de los chilenos, sus sindicatos y sus organizaciones empresariales, el sector público y el sector privado, los partidos de gobierno y los de oposición, el Poder Ejecutivo y el Parlamento, hemos trabajado, manteniendo nuestras legítimas diferencias, pero aunando esfuerzos para una tarea que todos sentimos como común.

Nuestros desafíos son enormes y estamos más optimistas que satisfechos. Nuestra estrategia y la de toda América Latina requiere de una efectiva incorporación a la economía mundial para derrotar la pobreza y hacer verdaderamente estables sus sistemas democráticos. Por ello es que la actual coyuntura internacional es una oportunidad para dar un salto histórico, como lo han hecho recientemente otras regiones del mundo. Por ello, también, el esfuerzo no es sólo local sino que requiere del compromiso de la comunidad internacional, para que esa oportunidad y nuestro esfuerzo no se frustren en el proteccionismo de las naciones desarrolladas.

Para el conjunto de América Latina, el restablecimiento de la democracia ha hecho emerger al primer plano una serie de problemas

que requieren de acciones concertadas a nivel regional. La articulación de estas acciones a nivel multilateral, con los bloques económicos, culturales y políticos que están dando forma al mundo contemporáneo, es también fundamental para el éxito de esta estrategia.

En el ámbito de la paz social, la lucha contra la delincuencia y el terrorismo nos exigen cooperación, intercambio de experiencias y voluntad común. No hay sociedad libre del flagelo del delito y hoy existen redes que se extienden internacionalmente, como la del narcotráfico. Por ello debemos actuar decididamente, dentro del marco del Estado de Derecho, en todos los frentes necesarios.

Tenemos el desafío de avanzar hacia nuevas fases de nuestro desarrollo económico, agregando mayor valor a nuestros productos. Ello requiere mejorar la calidad de nuestra educación, la capacidad de nuestros jóvenes, requiere acceso a nuevas tecnologías, desarrollo de creatividad e imaginación.

Tenemos que revertir el deterioro de nuestro medio ambiente, cuidar de nuestros recursos naturales y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, en una región donde estos problemas son especialmente graves.

Para tener éxito en estas tareas es preciso superar un tercermundismo rezagado y participar activamente en el comercio mundial, abriendo nuestras economías. Es lo que ha intentado Chile, con los resultados ya señalados, y con una inversión sin precedentes en nuestra historia. Estamos demostrando en los hechos la falsedad del aserto de que los latinoamericanos no somos pueblos con vocación científica o tecnológica.

Nuestra región atraviesa por un importante momento de apertura y modernización de sus estructuras económicas. Al mismo tiempo, vemos una decidida voluntad de nuestras naciones para buscar acuerdos y definir en conjunto políticas en defensa de los intereses comunes de nuestros países, que nos permitan una participación con voz propia en el concierto internacional. Todo ello nos brinda un fundado optimismo para el futuro.

En todas estas áreas, la cooperación internacional es imprescindible. La extensión y rapidez de las comunicaciones, la fluidez de los mercados y la densidad que ha alcanzado la ocupación humana de nuestro planeta, nos pone en una situación de interdependencia absolutamente nueva en la historia de la humanidad.

El cuidado por el medio ambiente se presenta como el caso paradigmático de esta nueva situación. La tala de los bosques amazónicos, el adelgazamiento de la capa de ozono y el desastre de Tchernobyl han dejado de ser problemas locales, de responsabilidad de una determinada nación. Igualmente, resolver

el problema de la pobreza, que afecta a dos tercios de la humanidad no es responsabilidad exclusiva de los países que la sufren mayoritariamente, pues sus efectos se proyectan como la mayor amenaza sobre la estabilidad y la paz en el mundo.

Todo ello representa, a la vez, un desafío y una promesa: el desafío de descubrir y desarrollar nuevas formas de relación y cooperación que nos permitan avanzar en la solución de los problemas de manera eficiente y rápida; la promesa de arribar, en definitiva, a un futuro venturoso de paz y bienestar para todos los hombres.

Muchas gracias.

* * * * *

HELSINKI, 27 de Mayo de 1993.

MLS/EMS.